



Reglamento de la Ley de Asociaciones Público-Privadas | *Regulation of the Public-Private Partnerships Law*

07 de Noviembre de 2012 | November 07, 2012

Reglamento de la Ley de Asociaciones Público-Privadas

El día de ayer entro en vigor el Reglamento de la Ley de Asociaciones Público-Privadas (el "Reglamento") publicado el día 05 de Noviembre del 2012 en el Diario Oficial de la Federación. Dicho Reglamento se encarga de especificar ciertas disposiciones que no habían sido completamente cubiertas por la Ley de Asociaciones Público-Privadas la ("LAPP"). El presente Boletín tiene como finalidad dar un panorama general del contenido e implicaciones que este Reglamento trae consigo a este novedoso método de contratación con entidades públicas.

Disposiciones Generales

El reglamento especifica que para que un proyecto pueda considerarse como de largo plazo (en atención al artículo 2 de la LAPP) deberá tener una duración de por lo menos 3 años.

A efectos de la inversión requerida, los proyectos podrán ser considerados de la siguiente manera:

- Puro: cuando los recursos para la prestación de servicios y los costos de inversión, operación y conservación de la infraestructura sean recursos federales presupuestarios.
- Combinado: cuando los recursos sean federales presupuestarios, del Fondo Nacional de Infraestructura u otros recursos federales no presupuestarios, y también provenientes de una fuente de pago diversa a las anteriores.
- Autofinanciable: Cuando los recursos para su desarrollo y ejecución sean aportaciones distintas a numerario, recursos de particulares o sean generados por el mismo proyecto.

Los actos y trámites relativos a los proyectos de asociaciones público-privadas (APPs) podrán ser realizados a través de

Regulation of the Public-Private Partnerships Law

Yesterday entered into force the Regulation of the Public-Private Partnerships Law (the "Regulation") published on November 05, 2012, in the Official Gazette of the Federation ("DOF"). This Regulation contains certain provisions that had not been completely covered by the Public-Private Partnership Law (the "PPPL"). The present Newsletter intends to give a general overview of the contents and implications this Regulation brings to this new method of contracting with public entities.

General Provisions

The Regulation specifies that in order for a project to be considered as a "long term contractual relationship" (in terms of article 2 of the PPPL) it shall be, at least, three years long.

In relation to the investment required for the project, they might be considered in one of the following ways:

- Pure: in cases where the resources provided for the rendering of services, investment costs, operation and preservation of infrastructure come from federal budgetary resources.
- Combined: in cases where the funds provided are federal budgetary resources, from the National Fund for Infrastructure or any other federal non-budgetary, as well as from a different source of payment
- Self-financing: When the resources provided for its development and execution are private resources or generated by the same project.

The acts and proceedings required in relation with the Public-Private Partnerships (PPPs) may be completed through electronic means if the state department or federal entity has regulated such possibility. The documents, communications and notifications containing an Advanced Electronic Signature (FIEL)

medios electrónicos cuando la dependencia o entidad federal tenga regulada tal posibilidad. Los documentos, mensajes y notificaciones que cuenten con la FIEL tendrán el mismo valor probatorio que los presentados con firma autógrafa

En el sitio web CompraNet se incluirá, además de información relativa a proyectos existentes de APPs, las propuestas no solicitadas y un Registro Único de Desarrolladores. Dicho registro tendrá fines de publicidad y transparencia por lo que estar inscrito en él no será un requisito esencial para poder participar en este tipo de proyectos.

En aquellos proyectos cuyo monto de inversión inicial supere los 400 millones de unidades de inversión¹ (UDIS), deberá de preverse obligatoriamente la participación de un testigo social designado por la Función Pública, el cual que pueda observar el proceso e identificar cualquier irregularidad. El testigo social elaborará un informe describiendo como se llevo a cabo el procedimiento.

En caso de terminación anticipada por causas no imputables al desarrollador, éste tendrá derecho a recibir el reembolso de gastos e inversiones indispensables que demuestre haber realizado, siempre y cuando estén directamente relacionadas con el proyecto y no sean recuperables.

El Reglamento también contiene especificaciones técnicas adicionales a los previstos por la LAPP respecto sobre los contenidos que deben ser observados en los estudios de factibilidad, propuestas no solicitadas, ofertas, calculo de infracciones, garantías, etc.²

Solución de controversias

La Ley de Asociaciones Público-Privadas ha llamado la atención debido a los métodos alternativos previstos por ella para resolver las controversias que pudieran surgir de las APPs, los cuales menciona en su capítulo duodécimo: estos son el Comité de Expertos, la Conciliación y el Arbitraje.

Estos mecanismos se introducen en la LAPP para dar una mayor seguridad a las entidades privadas al permitir solucionar sus controversias sin asistir a tribunales locales cuyo actuar pudiera verse afectado por la influencia de las entidades públicas en dichas disputas. Algunos detalles en la redacción de dicho capítulo de la LAPP habían sido motivo de debate sobre sus implicaciones, las cuales el presente Reglamento ha procurado aclarar.

En este tema, el Reglamento aclara que el procedimiento para resolver divergencias de naturaleza técnica o económica ante un Comité de Expertos no es un requisito previo para que procedan otros mecanismos de solución pactados en el contrato.

shall have the same evidentiary value as those submitted with autograph signature.

On the website CompraNet will be included, in addition to the information regarding existent PPPs projects, the unsolicited proposals made and a Developers' Registry. Such registry will be created for publicity and transparency purposes; therefore, being registered on it will not be an essential requirement to be able to participate in this kind of projects.

In projects where the initial investment amount is greater than 400 million of investment units³ (UDIS), the participation of a "social witness" will be a compulsory requirement. The social witness will be designated by the Public Function Ministry, and will observe the process and identify any irregularity. The social witness will elaborate a written report describing how the process was performed.

In case of early termination of the Contract for reasons not attributable to the developer, the same will have the right to receive reimburse for all indispensable expenses and investment made. It must be proven that such expenses and investments were directly related to the project and that they are not recoverable by other means.

The Regulation also provides some specifications additional to the ones provided by the PPPL in regard to the technical contents that shall be observed at the time of performing the feasibility studies, unsolicited proposals, the economic offer, calculation of penalties, guarantees, etc.⁴

Dispute Resolution

The Public-Private Partnerships Law has caught the public attention due to the alternative methods that it provides to solve disputes that may arise from PPPs. Established in its Twelfth Chapter; these are Expert Committees, Conciliation and Arbitration.

These mechanisms of dispute resolution are implanted in the PPPL to give greater security to private entities, allowing them to solve their controversies without appearing before local tribunals, which might be influenced by the public entities involved in such disputes.

Some details in the wording of the corresponding LAPP's article have raised debate over some of its implications. The PPPL Regulation helps to clarify some of these concerns

In this line of argument, the Regulation provides that the proceeding to solve controversies of a technical or economic nature before an Expert Committee is not a previous requirement for the commencement of other dispute resolution mechanisms provided by the contract.

¹ \$1'934, 635,200.00 de pesos (al 06 de Noviembre de 2012).

² Estas especificaciones no serán cubiertas por el presente documento debido a su extensión y carácter técnico.

³ Amount equivalent to \$1'934,635,200.00 pesos (by November 06, 2012)

⁴ Due to its extension and technical nature, these specifications will not be addressed in the present document.

El Reglamento también reconoce que las controversias relacionadas con rescisión de un contrato de APPs podrán resolverse por medio de Arbitraje, mas no reconoce la posibilidad de someter a este mecanismo la revocación de concesiones o autorizaciones, ni los llamados “actos de autoridad”. Por último, redundante que en contra del laudo arbitral no procede recurso alguno más que, en ciertos casos, el juicio de amparo.

Conclusiones

El Reglamento de la Ley de Asociaciones Público-Privadas es un complemento del marco sobre el cual se llevarán a cabo los proyectos de APPs en nuestro país y refleja la intención de la Administración Pública de atraer inversión brindando mayor seguridad jurídica a los inversionistas. Del mismo modo, es un elemento que evidencia la incorporación de México a la tendencia mundial de fomentar una más eficiente colaboración entre entidades públicas y privadas para conseguir objetivos comunes.



Para información adicional, puede comunicarse con cualquiera de los miembros de nuestro Equipo de Práctica de Corporativo & Negocios.

M. Alejandro Ripoll González
aripoll@rrs.com.mx

Guadalupe Esparza Sánchez
lesparza@rrs.com.mx

Rafael Raya Lois
rraya@rrs.com.mx

NOTA IMPORTANTE: La información aquí contenida es de naturaleza general y de carácter informativo. Por favor considere que lo aquí señalado no aborda las circunstancias de ningún individuo o entidad. Recomendamos no tomar ninguna medida basado en esta información sin la debida asesoría profesional de nuestros abogados en base a su situación particular.

The Regulation also recognizes that disputes related to the rescission of PPPs Contracts might be settled through Arbitration, however, it does not give the possibility to submit to Arbitration the reversal of concessions or authorizations, neither the so called “acts of authority”. Finally, it redundates in the fact that against the arbitral award shall be no appeal, with the exception, only in certain specific cases, of the “Amparo”.

Conclusion

The Regulation of the Public-Private Partnerships Law complements the framework over which the PPPs projects will be carried out in our country and reflects the Public Administration’s intention to attract foreign investment by granting greater security to investors. Likewise, it is an instrument that demonstrates Mexico’s incorporation to the growing global tendency to promote efficient collaboration between public and private entities to achieve common objectives.

For additional information, you may contact any of the members of our Corporate & Business Practice Team.

IMPORTANT NOTE: The information here contained is of general nature and for informative purposes only. Please consider that what is here stated does not apply circumstances of any individual or entity. We strongly recommend not performing any activity based on this information without the professional assistance of our lawyers considering your particular circumstances.

Nuestro Equipo de Práctica Corporativo & Negocios con gusto lo puede apoyar en los siguientes temas:

Sociedades Mercantiles y Civiles	Preparación y negociación de
Estructuras Corporativas	Contratos Civiles, Mercantiles,
Inversión Extranjera	Administrativos, entre otros
Fusiones & Adquisiciones	Propiedad Industrial e Intelectual
Transacciones y operaciones de	Operaciones de Comercio Exterior
Negocio	Auditorías Legales
Contratos de Franquicia	Planeación Patrimonial
Joint Ventures	

Our Corporate & Business Practice Team can gladly assist you in the following areas:

Commercial and civil entities	Drafting and negotiation of Civil,
Corporate Structures	Commercial, Administrative
Foreign Investment	Agreements, among others
Mergers & Acquisitions	Industrial and Intellectual Property
Business Transactions	Foreign Trade
Franchising Agreements	Legal Due Diligence
Joint Ventures	Asset Planning

GUADALAJARA | JESUS GARCÍA NO. 2945 PISO 2, PRADOS PROVIDENCIA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO. +52 (33) 3682 9539 + 52 (33) 3673 8639

MÉXICO | ROBERTO GAYOL NO. 1219, 1ER PISO A-1, COLONIA DEL VALLE, 03100, MÉXICO, D.F. +52 (33) 5488 6858

VERACRUZ | RIO PAPALOAPAN NO. 117 1ER PISO, COLONIA CUAUHTÉMOC, XALAPA, VERACRUZ, 91069, +52 (22) 8817 6030

NEW YORK | 80 BROAD STREET, 5TH FLOOR, NEW YORK, NY 10004, +212 837 7718 +212 837 7792

RRS.COM.MX